

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 22 de 2022: Al despacho el proceso contra **JOSÉ RICARDO OSTOS NOMESQUE** identificado con C.C. No. 80.108.244, informando que se recibe a través del correo institucional el día 8 de marzo de 2022, la comunicación procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Cachipay Cundinamarca, quien pone en conocimiento la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022, radicado CUI 25 26 96 00691 2021 00553 por el delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS en contra del infractor, capturado el pasado 8 de diciembre de 2021.

En la presente oportunidad, ingresan las presentes diligencias al despacho para el estudio de los descargos del interno allegados el 3 de febrero de 2022 y el estudio de la posible revocatoria del sustituto de prisión domiciliaria otorgado por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020. (...)”. Sírvase proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo veintidós (22) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0160

Radicado CUI:	110016000028201002904
Condenado:	JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE
Identificación:	C.C. No. 80.108.244
Delitos:	HOMICIDIO, HOMICIDIO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA DE TENTATIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES
Reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA- Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad – La Mesa -
Decisión:	REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA – artículo 38G del C.P.

1.- MOTIVO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a pronunciarse sobre la posible revocatoria del sustituto penal de la Prisión Domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, otorgado por el homólogo 25 de Bogotá D.C., al condenado **JOSÉ RICARDO OSTOS NOMESQUE** identificado con C.C. No. 80.108.244, quien se encuentra descontando pena en su domicilio (prisión) ubicado en la **Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca**, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de la Mesa Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello.

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el **15 de agosto de 2010**, el Juzgado 24 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 24 de julio de 2012, CONDENÓ a **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** a la pena principal de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (256) MESES DE PRISIÓN** como autor responsable del delito de **HOMICIDIO, HOMICIDIO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES** y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por un término de quince (15) años. ABSOLVIÓ a Cesar Alonso Pérez Rodríguez identificado con C.C. No. 80.730.716 de los cargos de Homicidio, Homicidio en la modalidad de Tentativa en concurso heterogéneo con Fabricación, Tráfico, Porte de Armas de Fuego, accesorios, Partes o Municiones, endilgados por la FGN en audiencia preliminar.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante decisión del 17 de septiembre de 2012 declaró desierto el recurso de apelación y por sentencia emitida el 24 de enero de 2013, CONFIRMÓ el fallo condenatorio - Aclaración de Voto MP. Carlos Héctor Tamayo Medina -.

La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal -, a través de decisión del 10 de junio de 2015, resolvió CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y fijó en 240 MESES la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al infractor y en lo demás el fallo se mantiene incólume. La decisión condenatoria cobró ejecutoria el 24 de junio de 2015.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del asunto el 6 de agosto de 2015 y el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 16 de junio de 2020 negó al condenado la prisión domiciliaria. Como quiera que el infractor interpuso recurso de reposición en contra de la decisión, a través de providencia del 20 de agosto de 2020, resolvió reponer la providencia recurrida y CONCEDIÓ al condenado la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, previo pago caución 5 smlmv y suscripción de la diligencia de compromiso.

El infractor en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución mediante póliza CBC100005697 y póliza No. 12-53-101001085 del 24 de agosto de 2020, suscribió diligencia de compromiso el 27 de agosto de 2020¹; fijó el domicilio en la Calle 36 Sur No. 78G 43 Interior 11 Supermanzana 7 en Kennedy Bogotá D.C.

El homólogo 25 de Bogotá mediante auto del 16 de octubre de 2020, AUTORIZÓ el cambio de domicilio al condenado a la CALLE 2 SUR No. 3 – 01 en Cachipay Cundinamarca.

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso el 27 de noviembre de 2020 mediante auto de sustanciación No. 0672 y por auto del 19 de noviembre de 2020 se dispuso incorporar el expediente digital procedente del correo electrónico duranp@cendoj.ramajudicial.gov.co (Centro Servicios Administrativos, para que formara parte de las diligencias. En vista que el interno se encontraba a cargo del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota -, se recibió el 30 de noviembre de 2020 a través del correo institucional la cartilla biográfica del sentenciado y la diligencia de compromiso suscrita por el condenado con fecha 27 de agosto de 2020.

¹ Folio 10, 11, 17 Y 18 – C03 (016) – expediente digitalizado.

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Conforme al oficio No. 0030/DISPO 3 – ESTPO 6 – 29.11 suscrito por el Intendente. Rojas Cristancho Martin – Comandante Estación Policía Cachipay, mediante el cual informó sobre la captura del condenado el día 8 de diciembre de 2021 dentro del proceso radicado CUI 252696000691202100553, posible delito Violencia Intrafamiliar, este despacho mediante auto de sustanciación No. 0136, dispuso correr el traslado del artículo 477 de la Ley 906 de 2004 al infractor para que presentara las explicaciones pertinentes que justifiquen los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas al estar en prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., otorgado por el homólogo 25 de Bogotá, mediante auto del 20 de agosto de 2020, dado a la comisión de otro delito.

Allegados los respectivos descargos por parte del condenado el día 3 de febrero de 2022, este Juzgado dispuso mediante auto de sustanciación No. 0170 del 1 de marzo de 2022, oficiar al Juzgado Promiscuo de Cachipay cundinamarca, con el fin de que informara a este despacho sobre el estado actual del proceso radicado CUI 252696000691202100553, delito Violencia Intrafamiliar, por el cual el infractor fue capturado el pasado 8 de diciembre de 2021 y se encuentra recluso en la Estación de Policía de Cachipay Cundinamarca, y se le solicitó, que una vez se emita la decisión que corresponda, se allegue copia de la misma a este Juzgado, con el fin, previo a resolver sobre la viabilidad de **DECRETAR LA REVOCATORIA DEL SUSTITUTO DE PRISIÓN DOMICILIARIA otorgado por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020.**

El día 8 de marzo de 2022, se recibe a través del correo institucional procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Cachipay Cundinamarca, la sentencia condenatoria proferida el 8 de marzo de 2022, dentro del radicado CUI 252696000691202100553, delito **Lesiones Personales Dolosas** en contra de **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**

Respecto a lo requerido por el Intendente Edwin Ovalle González – Comandante de la Estación de Policía de Cachipay, mediante oficio GS-2022-0149, esta agencia judicial, legalizó la disposición del infractor por auto de sustanciación No. 0226 del 11 de marzo de 2022, y solicitó al Comandante de dicha Estación, la conducción de manera inmediata de **JOSE RICARDO OSTOS NOMEQUE** a su lugar de domicilio ubicado en la Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca, lugar en donde deberá continuar purgando pena en prisión domiciliaria dada su situación de privado de la libertad dentro del presente asunto.

JOSÉ RICARDO OSTOS NOMESQUE ha descontado pena dentro del presente asunto desde el 11 de julio de 2011² al 8 de diciembre de 2021³.

Durante el curso del proceso el condenado, cuenta con redenciones de pena de 20 meses y 4.5 días, reconocidas por el homólogo 16 y homólogo 25 de Bogotá D.C.

En esta oportunidad ingresan al despacho las presentes diligencias para el estudio de los descargos del interno allegados el 3 de febrero de 2022 y el estudio de la posible revocatoria del sustituto de prisión domiciliaria otorgado por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020⁴ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

² Boleta de Detención No. 029 – folio 13 C02 (001) – expediente digitalizado.

³ Fecha de captura radicado CUI 252696000691202100553 anexa a oficio No. 0030/DISPO 3-ESTPO 6-29.11 suscrito por el Intendente Rojas Cristancho Martin – Comandante Estación Policía Cachipay.

⁴ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico traemos a colación de la Ley 65 de 1993 lo siguiente:

"ARTÍCULO 104. ACCESO A LA SALUD. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica."

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en

su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 546 de 2020, mediante el cual adoptó *“medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*.

Por lo anterior, es diáfano que las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la revocatoria de la prisión domiciliaria - artículo 38 G del C.P., del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en prisión domiciliaria en la **Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca**, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007⁵.

De acuerdo a la fecha de los hechos (15 de agosto de 2010), **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2 De los descargos

En vista de lo acontecido dentro del radicado CUI 252696000691202100553, delito Lesiones Personales Dolosas (captura 8 de diciembre de 2021), se REQUIRIÓ al implicado el 31 de enero de 2022 mediante auto de sustanciación No. 0136, corriéndole el traslado del artículo 477 de la Ley 906 de 2004, a fin de que presentara las explicaciones pertinentes que justificaran los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas, al estar bajo el sustituto de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P. -, el cual fue otorgado por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020, dado a la comisión del delito de violencia intrafamiliar (radicado CUI 252696000691202100553), siendo capturado el pasado 8 de diciembre de 2021 a las 20:10 horas.

En consecuencia el procesado mediante apoderado judicial allegó los respectivos descargos manifestando: *“(…) ARGUMENTOS DE LA DEFENSA: Con el fin de sustentar y probar las falacias del informe policivo a que hace alusión el señor Juez de Ejecución de Penas en su auto de sustanciación No. 0136, mediante el cual el Intendente **ROJAS CRISTANCHO MARTIN**, Comandante de la Estación de Policía de Cachipay Cundinamarca, solicita la revocatoria de la detención domiciliaria, al respecto dicho informe*

⁵ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y Guaduas (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

policivo es amañado, por cuanto riñe con la verdad verdadero con la que debe actuar los funcionarios policiales, los cuales deben velar por la seguridad de los conciudadanos, en este evento del Municipio en el cual se encuentran vinculados.

*Lo decantado en el aludido informe policial carece de veracidad, pues desde ahora le informo que no existe ningún tipo de captura en flagrancia, como lo narra el informe policial, por cuanto no es cierto que fuese capturado huyendo, y frente a este hecho lo que realmente sucedió es que mi prohijado se enteró en la noche en que ocurrieron los hechos, que su excompañera **DIANA MARIA MENDOZA SUAREZ**, se había lesionado, por ello cerro la tienda de víveres de su propiedad, en el cual trabaja, dirigiéndose a donde la señora **ESTELA GONZALEZ VANEGAS** preguntándole si era cierto que ella había tenido un accidente y ella le confirmó que sí porque ella la había llevado al centro de salud, en el carro de su propiedad, por cuanto se había caído en la calle, cuando venía Compañía de dos amigas, entre ellas estaban **JINETH VICTORIA SEGURA BETANCUR** y **MARIA DEL PILAR MORENO AYALA**, ingresando el centro de salud, siendo atendida por la enfermera de nombre Viviana, y siéndoles cogido 3 puntos en la cabeza., y saliendo del almacén de ropa de propiedad de la señora **ESTELA GONZALEZ VENEGAS**, y al salir de allí iba caminando hacia su almacén de viveres, cuando fue capturado, por la policía, y que supuestamente iba huyendo, argumentando que **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, era el que le había producido las lesiones, cuando eso no era cierto, pues los hechos no sucedieron como los narran en el informe policial, y de las persona que como testigos estuvieron en el atrio de los hechos, apporto como pruebas una declaración extrajuicio de cada una de ellas incluyendo la supuesta víctima.*

*Así las cosas, su Señoría, insisto, no existen elementos suficientes que lo lleven a la convicción que lo depuesto por los policiales en su informe, pues carecen de veracidad, más aún como lo manifiesta la supuesta víctima; y menos como dice el informe que los policías la recogieron y la llevaron al centro de salud, pues esto es falso, tal y como lo manifiestan las compañeras y testigos de los hechos en cada una de las declaraciones extra juicio las cuales anexo, de lo anterior se deduce como una retaliación de los policiales, realizados a través de los falsos positivos; lo cual se probará en el juicio por la supuesta violencia intrafamiliar, la cual nunca ha existido y menos que hubiese dejado su lugar de domicilio el cual viene cumpliendo, siendo el almacén de víveres donde vive y trabaja, es decir, **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, ha venido cumpliendo cabalmente con el acuerdo y compromiso firmado ante el señor Juez de Ejecución de Penas de Bogotá.*

Además. Hay otra serie de incoherencias o falacias de los policiales, en su informe, las cuales saldrán a la luz pública, en el respectivo juicio.

*Ante todo no se debe olvidar lo depuesto por la declarante **STELA GONZALEZ VANEGAS**, quien afirma que RICARDO fue únicamente a su almacén de ropa a preguntar el suceso de DIANA, es decir que mi patrocinado, OSTOS NOMESQUE, salió de su lugar de residencia y trabajo ubicado en la Calle 2 No. 3-01, Almacén de víveres llamado Última Lágrima el cual queda cerca, que fue por corto tiempo para saber que la había pasado a su excompañera DIANA., de lo contrario él no había salido debido a su impedimento; es por lo que en verdad está justificando lo solicitado por el despacho.*

*Por lo antes expuesto, es que nuevamente insisto Señor Juez, **NO REVOCAR** el beneficio de la detención domiciliaria a mi prohijado, y en su defecto continuar disfrutando de la misma, por no existir elementos suficientes de convicción, ya que con las pruebas que apporto, desmienten lo susodicho en el decadente informe policivo, el demuestra la apatía de los policiales por el contrario OSTOS NOMESQUE por el solo hecho de estar en este Municipio de un beneficio que es otorgado por disposición legal (...).*

Anexa: a) Declaración extra juicio de **DIANA MARIA MENDOZA SUAREZ**; b) Declaración extrajuicio de **JINETH VICTORIA SEGURA BETANCUR**, c) Declaración extrajuicio de **MARIA DEL PILAR MORENO AYALA** y; d) Declaración extrajuicio de **STELLA**

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

GONZALEZ VANEGAS, declaraciones rendidas ante la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá el día 2 de febrero de 2022.

4.3 De la revocatoria

El mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria es un beneficio que consiste como detalla su nombre en que el infractor en lugar de purgar la pena en forma intramural pueda de la misma manera cumplir a lo que ha sido condenado domiciliariamente rodeado del núcleo familiar y sustrayéndolo del ambiente carcelario “condicionado” al cumplimiento de unas obligaciones, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible pero condicionada a que el beneficiario cumpla con ciertas exigencias de las cuales depende su cumplimiento.

Visto lo anterior y observando en principio que **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, se pronunció dentro del término legal concedido y dio las explicaciones necesarias, procede el juzgado a examinar.

Al señor **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, el homólogo 25 de Bogotá D.C., le concedió la prisión domiciliaria señalada en el art. 38G de la Ley 599 de 2000.

“ARTICULO 38G. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2014 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; (...) ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

PARÁGRAFO. Los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, (...), no tendrán el beneficio de que trata este artículo.

En efecto al reunir los presupuestos señalados en la norma se le concedió al infractor este mecanismo sustitutivo el cual, no es para que goce de la libertad y esté programando citas, visitas, salidas o estar infringiendo la ley, sino que la prisión domiciliaria como mecanismo alternativo se debe regir bajo las mismas normas y políticas de los Reglamentos internos del INPEC para la intramural.

Impone el artículo 38B del Código Penal las siguientes obligaciones a los condenados cuando les es concedido el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria “i) No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial; ii) Que dentro del término que fija el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia; iii) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; iv) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

De conformidad con lo anterior, el Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004- establece que tal revocatoria debe tener lugar previo traslado al sentenciado en donde en

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Para garantizar su derecho al debido proceso, le son solicitadas las explicaciones correspondientes.

Al respecto expresa la norma:

“ARTÍCULO 477. NEGACIÓN O REVOCATORIA DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. De existir motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado para dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones pertinentes.

La decisión se adoptará por auto motivado en los diez (10) días siguientes.”

La Corte Constitucional se refirió sobre el tópico mediante la Sentencia C – 006 de 2003, Magistrado ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en los siguientes términos:

“En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo, puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento carcelario. Es en ejercicio de dicha potestad que el legislador estableció la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta figura constituye un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una pena de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella. Este beneficio no opera de manera automática, pues el juez debe evaluar los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad”.

Y añadió:

“La revocatoria no constituye una sanción que comporte el desconocimiento del principio de non bis in ídem, pues al condenado no se le impone una sanción adicional por el mismo hecho que originó la condena, ni se agrava el quantum de su condena. La revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para el evento de incumplimiento y no tiene por fin sancionar al condenado, sino garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder gozar de dicho beneficio”.

Atendiendo a las disposiciones normativas citadas, en vista que el día 19 de enero de 2022 se recibe en estas dependencias, oficio No. 0030/DISPO 3 – ESTPO 6 – 29.11 suscrito por el Intendente. Rojas Cristancho Martin – Comandante Estación Policía Cachipay indicando: *“(…) me permito informar a este despacho la captura realizada al señor JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE con cedula de ciudadanía número 80.108.244, edad 40 años, por el delito de violencia intrafamiliar, por el cual el juzgado de Anolaima emitió boleta de encarcelamiento al centro penitenciario la Modelo, Por esta razón solicito de manera respetuosa se estudie la posibilidad de revocar el beneficio de prisión domiciliaria que reposa ante su despacho por el delito de homicidio, ya que el señor José Ricardo Ostos incumplió dicho beneficio cometiendo otra conducta punible fuera de la dirección suministrada ante el INPEC para cumplir su condena (...)."* Anexa: Informe de Captura en Flagrancia – FPJ – 5, Formato de Narración de los Hechos – Víctima –, Acta de derechos del Capturado, Boleta de Detención Intramuros No. 3-2021 emitida por el Juzgado Promiscuo municipal de Anolaima Cundinamarca.

Luego, se recibe a través del correo institucional el día 8 de marzo de 2022, la comunicación procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Cachipay Cundinamarca, quien pone en

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

conocimiento la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022, radicado CUI 25 26 96 00691 2021 00553 por el delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS en contra del infractor, capturado el pasado 8 de diciembre de 2021.

En dicho fallo se indica:

“(…) OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO. Constatada la legalidad del allanamiento efectuado en audiencia de fecha 15 de febrero de 2022 realizado por JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE asistido por su defensor y verificada la inviolabilidad de las garantías fundamentales del procesado según lo previsto en el artículo 131 del código de Procedimiento Penal, previa la realización del trámite señalado en el artículo 447 del mismo estatuto procesal, se procede a dar por finalizada la instancia emitiendo el fallo condenatorio correspondiente.

...

2. ANTECEDENTES FÁCTICOS. Relata la Fiscalía en su escrito de acusación que: “(…) El día 8 de Diciembre de 2021, siendo las 20:10 horas, en la residencia familiar ubicada en la Calle 2 No. 3 87 del barrio centro de la ciudad de Cachipay, el ciudadano JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE IDENTIFICADO CON LA C.C. No.80.108.244 de Bogotá maltrató de manera física, verbal y/o psicológica a la señora DIANA MARIA MENDOZA SUAREZ identificada con la C.C. No. 1.030.594.448 de Cachipay (...) con quien convive, inicialmente profirió en su contra palabras soeces, amenazas de muerte y posteriormente o de manera simultánea la golpeo en varias partes de su cuerpo, utilizando para ello su humanidad...”

Posteriormente señala que: “Por los hechos antes descritos JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE IDENTIFICADO CON LA C.C. No. 80.108.244 de Bogotá fue capturado en situación de flagrancia por agentes de la Policía Nacional

...

RESUELVE

PRIMERO: CONDENAR a JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE identificado con C.C. No. 80.106.244 de Bogotá, de condiciones civiles y personales registradas, a la pena principal de DOCE (12) MESES DE PRISIÓN, como AUTOR responsable del delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS, cometido sobre la humanidad de DIANA MARÍA MENDOZA SUÁREZ, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan cuenta este expediente. SEGUNDO: Accesoriamente se le impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. TERCERO: Se CONCEDE el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta que no se acreditó circunstancia alguna de las prescritas en el artículo 68 A del C.P.; con período de prueba de dos (2) años y caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, previa suscripción de diligencia de compromiso. CUARTO: Ejecutoriado este fallo, comuníquese y compúlsense copias a las autoridades de que tratan los artículos 166 y 462 del C.P.P. y procédase al envío de la carpeta al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá- Cundinamarca, para lo de su competencia. QUINTO: Téngase en cuenta que la víctima DIANA MARÍA MENDOZA SUÁREZ fue indemnizada de manera integral por los perjuicios materiales y morales causados por el condenado JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE (...)

Aterrizando de inmediato al estudio concreto del asunto, y una vez analizadas las diligencias, el señor **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, concedido por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020

El condenado aceptó las condiciones que le fueron impuestas con la suscripción de la diligencia de compromiso el día 27 de agosto de 2020, ratificando así su consentimiento a cumplir cabalmente las obligaciones que impone el artículo 38 B del Código Penal, entre ellas, “No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello y cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

A pesar de los descargos presentados por el infractor se tiene que fue condenado por el delito endilgado al haberse allanado a cargos, conforme a los hechos, que infringió la ley y a pesar

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

de que se le dio una oportunidad de poder estar con su familia en su seno de hogar cumpliendo la pena, desobedeció las normas y políticas que arropan la prisión domiciliaria cometiendo nuevo delito, y cuya sentencia hace tránsito a cosa juzgada. Es más las personas que cumplen pena domiciliarmente pueden optar por trabajar y solicitar ante las directivas del Centro Carcelario y el juez que vigila, una vez reunidos los requisitos, permiso para dicha actividad, sin embargo analizadas las diligencias no aparece solicitud alguna del implicado.

En este proceso no solo se está tratando de la transgresión ocasionada por el condenado al haberse evadido de su domicilio, sino porque fue capturado en flagrancia y condenado por el delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS a sabiendas que se encontraba purgando pena bajo prisión domiciliaria, incumpliendo de esta forma las obligaciones que están estipuladas en el artículo 38 B del C.P. siendo dejado a disposición de dichas diligencias.

Lo anterior significa que el señor JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE no acató los reglamentos del INPEC ni tampoco lo consagrado en el artículo 38 B y ss de la Ley 599 de 2000 y artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, sobre todo en lo que tiene que ver con las salidas de su residencia sin autorización judicial.

Sobre este punto ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“...Este comportamiento revela una personalidad carente de escrúpulos frente al delito, cuando debía ser paradigma de rectitud y ejemplo para los demás, lo que permite colegir que la prevención especial y la reinserción social, solo se harán posibles mediante la detención intramural.

Y son precisamente la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado, los que llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley, cuando tenía el deber especial de acatarla, menos la respetará cuando no se desempeñe como juez penal o simple particular y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar detenida intramuralmente.

De otra parte, desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, como el presente, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno llevaría, como lo ha dicho la Sala⁶, un mensaje de desequilibrio en la aplicación del Derecho, una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia...”(subrayado nuestro).

Lo expuesto indica que el sentenciado **INCUMPLIÓ** las obligaciones que impone la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, por tanto, se estudia la posibilidad de revocar la medida concedida.

Al no estar justificado el incumplimiento de las obligaciones impuestas, y dada esta actitud de franco desacato a la justicia, de persistencia y obstinación por la transgresión y comportamiento rebelde, pese al generoso tratamiento y a las facilidades que se le han reconocido, dejan ver que no está dispuesto a sujetarse a las condiciones que le imprimen su calidad de condenado y por lo mismo le impiden aspirar a que se conserve la vigencia del sustituto conferido, pues se demuestra que el proceso resocializador no está surtiendo el efecto positivo esperado, en torno de la sujeción a los compromisos adquiridos, que son requisito fundamental de las benéficas condiciones reconocidas por la autoridad Judicial, por lo cual se evidencia la necesidad de aplicar tratamiento intramural, y como consecuencia directa, ha de revocarse el sustituto de la prisión domiciliaria concedido.

Por lo tanto, **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE**, fue condenado a la pena principal de DOCE (12) MESES DE PRISIÓN por el delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS dentro del radicado CUI 252696000691202100553 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Cachipay Cundinamarca, y a quien le fue concedido el

⁶ Ver auto de 23 de octubre/00, Seg. instancia. Rad. 16997. M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con periodo de prueba de dos (2) años, previo pago de caución prendaria equivalente a un smmlv y suscripción de diligencia de compromiso, motivo por el cual la autoridad de conocimiento expidió Boleta de Libertad de fecha 11 de marzo de 2022.

Así, este Despacho considera que el encartado necesita tratamiento penitenciario para que reflexione sobre su proceder y cumpla tanto con las normas de comportamiento legalmente establecidas, como las disposiciones penales que transgredió.

Por último, como la sanción penal impuesta no ha prescrito, y como quiera que, se reitera, no observó buena conducta, encuentra este servidor que la sanción penal está vigente, razón por la cual es pertinente exigir el cumplimiento de las obligaciones a que se sometió el sentenciado.

En consecuencia, sin ahondar en más consideraciones, este Despacho por encontrar que el sentenciado violó por acción sus obligaciones, se **REVOCARÁ** el sustituto penal concedido por el homólogo 25 de Bogotá, mediante auto del 20 de agosto 2020.

4.4 Sobre el Tiempo del Cumplimiento de la Pena:

Analizadas las diligencias se tiene que el sentenciado ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el día 11 de julio de 2011⁷ al 8 de diciembre de 2021⁸**, ha cumplido **físicamente 3804 días, que equivalen a 126 meses y 234 días.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **20 meses y 4.5 días**, reconocidas por el homólogo 16 y homólogo 25 de Bogotá D.C.

Por lo tanto, ha cumplido un tiempo de **CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES y VEINTIOCHO PUNTO CINCO (28.5) DÍAS.**

Como fue condenado a la pena principal de prisión de **256 meses**, vemos que le **QUEDA POR CUMPLIR CIENTO NUEVE (109) MESES y UNO PUNTO CINCO (1.5) DÍAS de manera intramural.**

Sobre el traslado inmediato del condenado de prisión domiciliaria a intramural en sede de Tutela señaló la Corte Suprema de Justicia:

“Por tanto, a pesar de que el auto interlocutorio proferido el del 21 de mayo del año en curso por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta no señala el efecto en que proceden los recursos de reposición y apelación, se entiende que el segundo es en el efecto devolutivo, por lo que disponer el traslado inmediato de la aquí accionante al establecimiento penitenciario no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten...”⁹.

En otra decisión afirmó:

“Luego de la revocatoria de la prisión domiciliaria por el incumplimiento de las obligaciones, el art. 29F ibídem de la misma codificación contempla:
ARTÍCULO 29F. REVOCATORIA DE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.

⁷ Boleta de Detención No. 029 – folio 13 C02 (001) – expediente digitalizado.

⁸ Fecha de captura radicado CUI 252696000691202100553 anexa a oficio No. 0030/DISPO 3-ESTPO 6-29.11 suscrito por el Intendente Rojas Cristancho Martin – Comandante Estación Policía Cachipay.

⁹ CSJ T RAD 105612 del 30 de julio de 2019, M.P. Dr **LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA**

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.

*En consonancia con las disposiciones en cita, en fallo CSJ STP10238 – 2019, advirtió esta misma Sala de Decisión que «disponer el **traslado inmediato** de la aquí accionante **al establecimiento penitenciario** no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten».*

En otras palabras, queda claro que, es deber del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, disponer el traslado perentorio del condenado que incumple las obligaciones adquiridas con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al centro carcelario...”¹⁰

4.5. Sobre la exigibilidad de la Caución

De otra parte, como quiera que el sentenciado violó las obligaciones a que se encontraba sometido en virtud de la prisión domiciliaria, se dispone de conformidad con lo previsto en el artículo 372 del C. P. P., hacer exigible la caución constituida para disfrutar de la prisión domiciliaria, en consecuencia, una vez en firme esta decisión, se informara al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo.

4.6 Sobre la Comisión y Notificación del condenado y apoderado judicial

Teniendo en cuenta que **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** se encuentra en prisión domiciliaria (Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

Se ordena por la secretaría de este despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al Dr. HUMBERTO POLO RUBIO apoderado judicial del condenado a través del correo electrónico hpolos@gmail.com

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de

¹⁰ CSJ T RAD 106432 del 3 de septiembre de 2019 M.P. Dra **PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR**

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.460 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento de la revocatoria del mecanismo sustitutivo.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»¹¹, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”¹²

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado no tuvo la conducta acorde con las normas que impone la prisión domiciliaria.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores

¹¹ Ibídem.

¹² CSJ T 102248

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.¹³

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

Por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020 y que en la actualidad nos encontramos organizando y ubicando los procesos.

Del mismo modo se tiene que mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 que autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“Autorizar el cierre extraordinario y suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento*.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se está presentando en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, *se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá*.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y desde la semana pasada nos encontrábamos en el alistamiento de todos los expedientes para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización los cuales fueron trasladados por la empresa contratada.

Ahora, en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021, inclusive. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021.

¹³ C.S.J. RAD 97792

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA**,

RESUELVE

PRIMERO.- RECONOCER que a la fecha el interno **JOSÉ RICARDO OSTOS NOMESQUE** identificado con C.C. No. 80.108.244, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **146 meses y 28.5 días** de la pena principal de prisión de 256 meses.

SEGUNDO.- REVOCAR a **JOSÉ RICARDO OSTOS NOMESQUE** identificado con C.C. No. 80.108.244, el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, concedido por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, en consecuencia, el condenado deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **109 meses y 1.5 días** de manera intramural.

TERCERO. Se ordena por la secretaría del Juzgado, **LIBRAR** la respectiva **ORDEN DE CAPTURA** en contra del sentenciado y oficiar a las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca, informando sobre la decisión aquí tomada para que dispongan el traslado inmediato del infractor **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** ante dicho Establecimiento Penitenciario.

CUARTO. Teniendo en cuenta que **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** se encuentra en prisión domiciliaria (Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

QUINTO.- Se ordena por la secretaría de este despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al Dr. **HUMBERTO POLO RUBIO** apoderado judicial del condenado a través del correo electrónico hpolos@gmail.com

SEXTO.- Por la Secretaria del Juzgado **PROCÉDASE** a remitir copia de la presente providencia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca, para que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO


JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 22 de marzo de 2022
Oficio No. 0637

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD
La Mesa Cundinamarca
juridica.epclamesa@inpec.gov.co

**URGENTE - TRASLADO A PRISIÓN INTRAMURAL A FIN DE MATERIALIZAR EL
TIEMPO QUE LE RESTA POR CUMPLIR DE LA PENA**

Radicado CUI:	110016000028201002904
Condenado:	JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE
Identificación:	C.C. No. 80.108.244
Delitos:	HOMICIDIO, HOMICIDIO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA DE TENTATIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES
Reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA- Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad – La Mesa -
Decisión:	REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA – artículo 38G del C.P.

Cordial saludo:

De conformidad con lo ordenado en auto de la fecha emitido por el suscrito, le solicito de manera atenta y en la mayor brevedad posible realizar el traslado del sentenciado **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE** identificado con **C.C. No. 80.108.244**, de su residencia actual ubicada en la **Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca**, a dicho establecimiento carcelario, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir **CIENTO NUEVE (109) MESES y UNO PUNTO CINCO (1.5) DIAS DE PRISIÓN** de la pena principal de 256 meses

Lo anterior, toda vez que mediante auto interlocutorio No. 0160 del 22 de marzo de 2022, este Juzgado REVOCÓ la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, que le había sido otorgado por el homólogo 25 de Bogotá por auto del 20 de agosto de 2020.

Aunado a lo anterior, se requiere que informe sobre el trámite de traslado solicitado.

Agradeciendo de antemano su eficaz y oportuna gestión.

Adjunto copia de auto interlocutorio No. 0160

Atentamente,


NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO


JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 22 de marzo de 2022
Oficio No. 0638

Señores Jefe Grupo de Capturas
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - SIJIN
Avenida El Dorado No. 75 - 25
Bogotá D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE identificado con C.C. No. 80.108.244** a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, concedido por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020, quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **109 meses y 1.5 días** de manera intramural.

LUIS ALEJANDRO ESPEJO CASTRO fue condenado por el Juzgado 24 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 24 de julio de 2012, a la pena principal de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (256) MESES DE PRISIÓN** como autor responsable del delito de **HOMICIDIO, HOMICIDIO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES** y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por un término de quince (15) años. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante decisión del 17 de septiembre de 2012 declaró desierto el recurso de apelación y por sentencia emitida el 24 de enero de 2013, CONFIRMÓ el fallo condenatorio - Aclaración de Voto MP. Carlos Héctor Tamayo Medina -. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal -, a través de decisión del 10 de junio de 2015, resolvió CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y fijó en 240 MESES la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al infractor y en lo demás el fallo se mantiene incólume. La decisión condenatoria cobró ejecutoria el 24 de junio de 2015.

El proceso se identifica con el radicado CUI 110016000028201002904 y este despacho conoce del expediente con el Número Interno 2020-0179, por lo tanto una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE
Identificación No.	C.C. No. 80.108.224 expedida en Bogotá D.C.
Fecha de Nacimiento	30 de mayo de 1981
Lugar de Nacimiento	Bogotá D.C.
Escolaridad	N/A
Ocupación	Vendedor ambulante
Nombre Padres	José Miguel y Rosalía
Estado Civil	Unión Manral de Hesho
Dirección	Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura de 1.70 mts; contextura gruesa; piel trigueña; cabello liso castaño oscuro.
Señales particulares	No registra

Cordialmente,


NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO


JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 22 de marzo de 2022
Oficio No. 0639

Señor
IT JORGE ALEXANDER MONTERO DUQUE
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - SIJIN
Carrera 58 No. 9 – 43 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE identificado con C.C. No. 80.108.244** a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, concedido por el homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de agosto de 2020, quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **109 meses y 1.5 días** de manera intramural.

LUIS ALEJANDRO ESPEJO CASTRO fue condenado por el Juzgado 24 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 24 de julio de 2012, a la pena principal de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (256) MESES DE PRISIÓN** como autor responsable del delito de **HOMICIDIO, HOMICIDIO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES** y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por un término de quince (15) años. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante decisión del 17 de septiembre de 2012 declaró desierto el recurso de apelación y por sentencia emitida el 24 de enero de 2013, **CONFIRMÓ** el fallo condenatorio - Aclaración de Voto MP. Carlos Héctor Tamayo Medina -. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal -, a través de decisión del 10 de junio de 2015, resolvió **CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE** la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y fijó en 240 MESES la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al infractor y en lo demás el fallo se mantiene incólume. La decisión condenatoria cobró ejecutoria el 24 de junio de 2015.

El proceso se identifica con el radicado CUI 110016000028201002904 y este despacho conoce del expediente con el Número Interno 2020-0179, por lo tanto una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	JOSE RICARDO OSTOS NOMESQUE
Identificación No.	C.C. No. 80.108.224 expedida en Bogotá D.C.
Fecha de Nacimiento	30 de mayo de 1981
Lugar de Nacimiento	Bogotá D.C.
Escolaridad	N/A
Ocupación	Vendedor ambulante
Nombre Padres	José Miguel y Rosalía
Estado Civil	Unión Marital de Hecho
Dirección	Calle 2 Sur No. 3 – 01 de Cachipay Cundinamarca
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura de 1.70 mts; contextura gruesa; piel trigueña; cabello liso castaño oscuro.
Señales particulares	No registra

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez